

Radicado: 05266-31-05-001-2020-00004-01
Radicado Interno: A1362222
Asunto: Confirma auto

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°213

Medellín, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Conoce la Sala del recurso de apelación formulado por el apoderado del señor **Juan Guillermo Quintero Uribe** contra el auto mediante el cual el juez se negó a decretar los testimonios solicitados como prueba de oficio por su apoderado.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante providencia escrita.

ANTECEDENTES

De la decisión apelada

Estando el proceso de la referencia en la etapa de decreto de pruebas, el apoderado del demandante le solicitó al juez del conocimiento que se decretara como prueba de oficio: los testimonios de las personas que integraron la parte activa del proceso con el demandante y que en virtud de conciliación suscrita con la sociedad demandada fueron excluidos del litigio. Esto con el fin de que fueran escuchados para demostrar la existencia de una conducta de discriminación por parte de la empresa.

Esta petición fue desestimada por el juez de primera instancia, por considerar que los mismos fueron solicitados por fuera de las oportunidades procesales establecidas por el legislador, señalando en ese sentido que se decretaría aquella prueba testimonial que fue solicitada en tiempo.

De la impugnación

El apoderado del actor solicita que se **revoque** esta decisión, por considerar que la prueba testimonial de quienes antes eran parte en el proceso son necesarios para esclarecer el contexto de la discriminación sindical que se presentó al interior de la empresa demandada.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado consagrado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, el apoderado de la demandada solicitó que se confirme la decisión de primera instancia, toda vez que la parte actora pretende reformar la demanda incluyendo pruebas nuevas desconociendo que la oportunidad procesal para estos efectos ya se encuentra precluida.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Competencia y trámite

Según lo establecido por numeral 1) del literal b) del artículo 10 de la Ley 712 de 2001, las Salas de los Tribunales Superiores de Distrito son competentes para resolver el recurso de apelación contra los autos susceptibles de este medio de impugnación, tal como lo es el que niegue el decreto o la práctica de una prueba (Numeral 4, Artículo 29 Ley 712 de 2001), proferido por los jueces laborales de circuito en primera instancia.

Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia, será (i) Determinar si es procedente el decreto de la prueba solicitada por el apoderado de la parte actora por fuera de las oportunidades previstas para el efecto.

De la oportunidad procesal para solicitar la práctica de pruebas

Se discute por parte del apoderado de la parte actora la negativa a practicar como “*prueba de oficio*” los testimonios que fueran solicitados en desarrollo de la etapa de decreto de pruebas, petición que implica realizar una precisión conceptual consistente en que el CPT y SS concibe un sistema procesal dispositivo o adversarial a partir del cual son las partes las que tienen la

iniciativa probatoria¹, con una corrección de carácter publicista consistente en la facultad del juez para decretar prueba de oficio.

Esta afirmación encuentra desarrollo legal en el artículo 54 del CPT y SS, que en su literalidad consagra:

Pruebas de oficio. Además de las pruebas pedidas, el Juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o a quienes aproveche, la práctica de todas aquellas que a su proceso sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos.

Lo expresado es importante para recordar que es en las partes en quienes recae la iniciativa de demostrar los hechos en los que sustentan sus pretensiones, aspecto regulado en el artículo 167 del CGP, advirtiéndose que para tal fin dentro del marco del debido proceso deben cumplir con las formalidades para su solicitud y práctica, siendo el juez el garante del respeto de este derecho.

En lo que refiere al caso de autos, el juez como garante de que las pruebas fueran aportadas en debida forma procedió a realizar su juicio de admisibilidad decretando las solicitadas por las partes en la demanda y su contestación, oportunidad que el apoderado del actor aprovechó para solicitar que se incluyera el decreto de nuevas “*pruebas de oficio*” para esclarecer la verdad de los hechos.

Esta solicitud fue rechazada por el a-quo en lo referente con la práctica del testimonio por considerar que no era la oportunidad procesal para realizar esta petición, aspecto en el que le asiste plena razón al funcionario a-quo, pues tratándose de pruebas que no fueron solicitadas en tiempo con la demanda, su corrección o adición, no es posible si quiera realizar un juicio de admisibilidad de las mismas, pues desconocen el presupuesto de haber sido solicitadas en tiempo.

Ahora, si acudiendo a la facultad oficiosa con que cuenta el juez para el decreto de pruebas se sostuviera que son esenciales para encontrar la verdad, tal raciocinio está en cabeza del a-quo y no puede ser obligado a tomar una decisión a través de un medio de control como el recurso de apelación, máxime cuando se reitera es la parte que utiliza este mecanismo, la que al plantear su

¹ Las oportunidades fundamentales para la petición y aportación de pruebas son: la demanda (Art.25 N°9 del CPT y SS) y su contestación (Art.31 N° 5 del CPT y SS).

teoría del caso omitió la inclusión de los testimonios que considera esenciales para la confirmación de sus hechos.

En este punto resulta importante recordar lo enseñado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en lo referente a la facultad-deber decretar pruebas de oficio en cabeza del juez:

En relación con las pruebas de oficio, esta Corporación ha sostenido que al acudir a un proceso judicial, es deber de las partes en litigio presentar al juez de la causa no solo su versión de los hechos, sino también, por vía general, los elementos probatorios tendientes a demostrar el fundamento de sus aspiraciones o defensas, debiendo soportar consecuencias adversas en caso de no hacerlo.

Entonces, exceptuando aquellos eventos donde la práctica de determinada prueba esté prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto, o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aquél sigue gozando de una discreta autonomía en la instrucción del proceso (sentencia STC 10179-2019).

A partir de lo expresado es claro para la Sala que el juez de primera instancia como instructor del proceso es quien tiene la facultad de decretar de oficio aquellas pruebas que considere necesarias para establecer la verdad de los hechos, sin que tal prerrogativa pueda ser utilizada por las partes para remediar omisiones cometidas al momento de hacer la petición de los medios de prueba que pretende hacer valer en el proceso, por lo que en este aspecto encuentra le asistió razón al juez a-quo al rechazar por inoportuna la solicitud presentada por el apoderado del demandante, motivo por el cual se **confirmará** el auto apelado.

Costas

Costas en esta instancia a cargo del demandante por ser totalmente desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 365 del Código General del Proceso. El valor de las agencias en favor de la sociedad demandada se fija en la suma de **\$250.000.**

Radicado: 05266-31-05-001-2020-00004-01
Radicado Interno: A1362222
Asunto: Confirma auto

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de decisión laboral del Tribunal Superior de Medellín,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión recurrida, que se revisa por vía de apelación, proferida en primera instancia por la Juez Laboral del Circuito de Envigado, el día **22 de mayo de 2022**, en el proceso promovido por el señor **JUAN GUILLERMO QUINTERO URIBE** contra **PLASTICOS TRUHER S.A.**

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Se ordena la devolución del expediente al juzgado de primera instancia.

Las anteriores decisiones se notifican por **ESTADOS**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado: 05266-31-05-001-2020-00004-01

Radicado Interno: A1362222

Asunto: Confirma auto

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
Nº 145 del 18 de agosto de 2022.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>